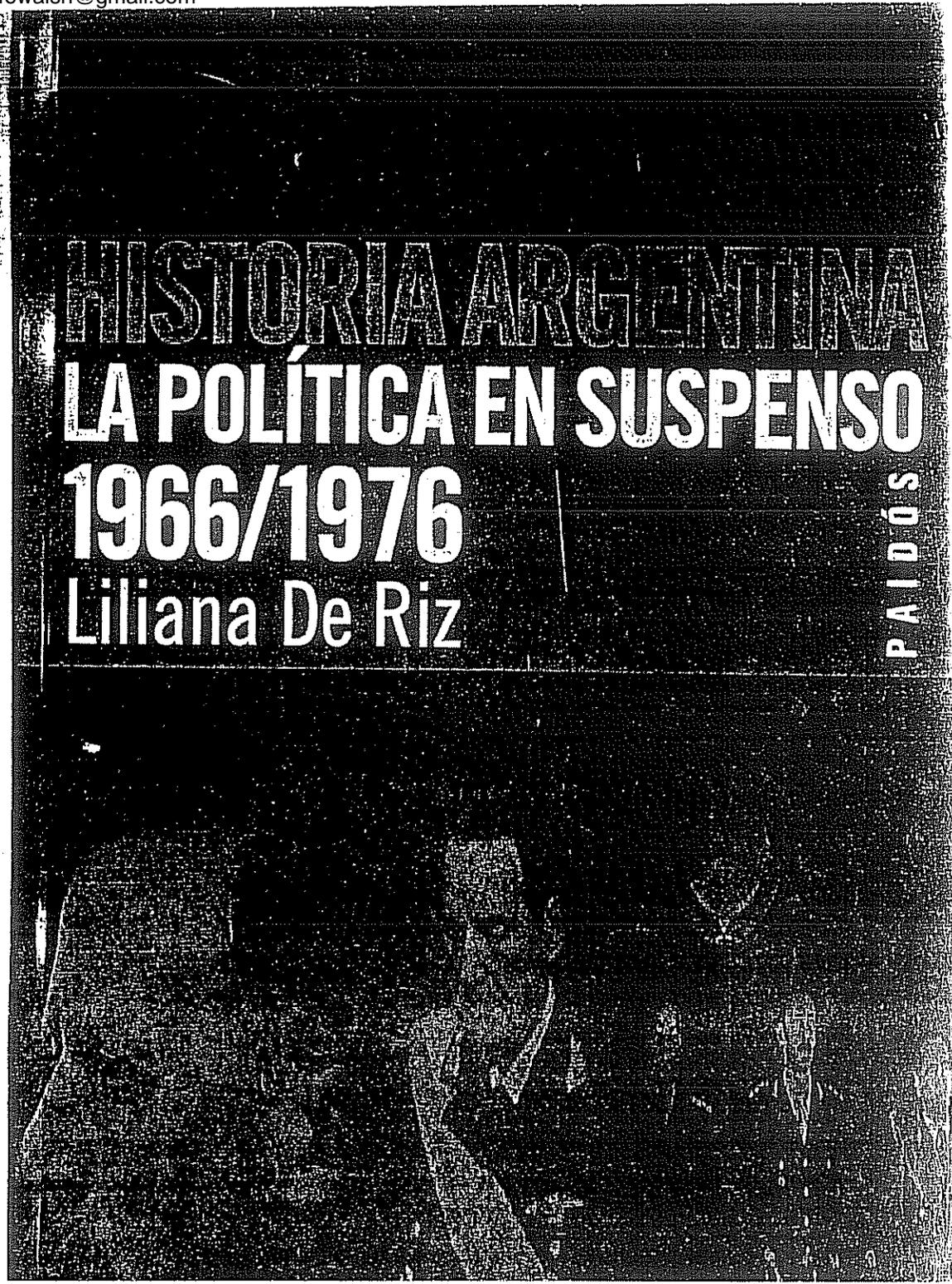


6

29/5

MUL
44 No 694

original
10 d/f
1 s/f



3. La Revolución Argentina

La denominada "Revolución Argentina" fue diferente de todas las experiencias golpistas que la precedieron. El poder del Estado se convirtió en un objetivo militar, era el instrumento para salir del atraso e insertar al país en el mundo. Las Fuerzas Armadas, a través de sus comandantes en jefe, asumieron la representación del pueblo y se dotaron de un estatuto que reservó a la Junta Revolucionaria el derecho de designar al presidente y depositar en él todos los poderes políticos del Estado. La Corte Suprema de Justicia fue removida y los nuevos miembros juraron con la fórmula revolucionaria. El presidente reunió las funciones legislativas y ejecutivas en sus manos. La centralización del poder, conforme a la lógica revolucionaria, disolvió la estructura federal del Estado. Los poderes políticos provinciales pasaron a ser una prolongación natural de la función presidencial.

¿Cuán poderoso resultó ser el presidente investido de estos poderes? En su discurso del 6 de julio de 1966, dirigido a las Fuerzas Armadas, Onganía se preocupó por dejar en claro que la autoridad



Juan Carlos Onganía en la tapa de Primera Plana.

der público habría de estar en sus manos. La función que la "Revolución Argentina" asignaba a los militares era la de garantes del nuevo régimen; una empresa que les exigía mantenerse apartados de la función pública: "La cohesión de nuestras instituciones, que hizo posible este acto histórico trascendental debe constituir nuestra preocupación permanente, porque es la máxima garantía del esfuerzo que inicia la República. Protegeremos esa unidad, substrayéndola del desgaste que supone el ejercicio de la función pública".

En nombre de la "doctrina de Westpoint", Onganía reivindicó su libertad de formar un gobierno con funcionarios civiles, sustraídos del control de las jerarquías militares. Sin embargo, fuera de su prestigio personal, su única base de sustentación eran las Fuerzas Armadas. ¿Creía Onganía que podría disciplinar a los generales, como lo había hecho con las tropas bajo su mando, y privarlos de toda injerencia en el gobierno, sin despertar un peligroso malestar? Había ganado la lucha por la presidencia, pero una vez en ella, comenzaba otra, para la cual pronto mostró que no estaba preparado.

Suprimidos los partidos, el reclutamiento de los funcionarios combinó criterios técnicos e ideológicos: la mayoría eran católicos, todos anticomunistas, se definían "apolíticos" y se abrevaban en vertientes que cubrían el nacionalismo conservador y el más progresista en temas sociales; había entre ellos autoritarios y más moderados en el plano político.²⁹ Como lo advertían las editoriales de la revista *Criterio*, el declarado apartidismo de los miembros del gabinete no era sinónimo de apoliticismo y las tensiones a la hora de tomar decisiones habrían de salir a la luz.³⁰

29. Integraron el gobierno varios de los miembros de El Ateneo de la República, asociación creada en setiembre de 1962 por "un grupo de ciudadanos preocupados por la suerte de la República" para contribuir a la solución de la crisis argentina mediante la difusión de toda palabra autorizada sobre los urgentes problemas nacionales del presente. La heterogénea composición de El Ateneo se reflejó en el gobierno de Onganía. Nacionalistas tradicionalistas como Máximo Etchebarry y desarrollistas como Mario Amadeo y Raúl Puigbó, ilustran las diferentes vertientes del nacionalismo católico. Para un análisis de la composición de esta asociación y de los miembros que formaron parte del gobierno de Onganía, véase Selser, Gregorio: *El Onganiato*, ob. cit., págs. 18-39.

30. Botana, Natalio; Braun Rafael y Floria, Carlos: *El régimen militar, 1966-1972*, Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, 1973, pág. 20.

Pronto se advirtió que el gobierno no tenía una idea clara de cómo llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como el que anunciaba. El presidente reclamaba que se le concediera tiempo para ofrecer realizaciones tangibles. El nombramiento del ministro de Economía fue una señal clara de la estrategia de Onganía. El doctor Néstor Salimei, un joven y exitoso empresario en el comercio de oleaginosas, ocupó el cargo. Católico practicante, se apresuró a declarar que ejercería su función "sin entrar en política". La lealtad hacia el presidente era su carta de presentación, y la garantía para Onganía de que el poder no escaparía de su control. Pero esta circunstancia determinaba su debilidad; no tenía otro apoyo que el que pudiera ganarse a través de una gestión exitosa. El ingeniero Alsogaray, nombrado embajador en Estados Unidos, vio así frustrarse su anhelo de ocupar nuevamente ese ministerio. Era un hombre demasiado influyente para desempeñarse en la conducción económica —hermano del general Julio Alsogaray, jefe del Primer Cuerpo del Ejército, hombre con actuación política destacada y aguerrido defensor del liberalismo económico— y estos antecedentes, sin duda, pesaron en la decisión de Onganía, quien comprendió que nombrarlo en ese car-



Onganía lee su primer mensaje: "Conciliación y reconstrucción".

go era quedar a su merced en un área estratégica de gobierno. Salimei era un recién llegado a la política con el único mérito conocido de ser un *self made man*. El ministro “exudaba confianza”, afirma Roth, y prefirió colaboradores extraídos de sus empresas en cuya lealtad podía confiar.³¹ Los empresarios pretendían que el nuevo ministro fuera un vocero confiable de sus intereses y orientaciones, pero la consigna de “crear trabajo”, levantada por Salimei, y las supuestas buenas relaciones que mantenía con el sector del sindicalismo proclive a negociar con el gobierno, sólo podían acrecentar la incertidumbre que despertaba un presidente para quien el proyecto de su gobierno era “un estado espiritual”.

Salimei eligió a sus colaboradores entre técnicos jóvenes, la mayoría de los cuales se había formado en el exterior a comienzos de la década, pero no tenían un programa en común, a lo sumo intenciones compartidas. Seleccionados por su perfil profesional, sin experiencia de gobierno, “no eran monetaristas ni provenían de la Escuela de Chicago”, sostiene Eduardo Zalduendo.³² El nombramiento de Felipe Tami en la presidencia del Banco Central, decidido partidario de una concepción estructuralista de la inflación, despertó inquietud entre los defensores del monetarismo y extendida alarma entre los grandes empresarios. Tami propugnaba un combate gradual a la inflación mediante un pacto social entre empresarios y trabajadores, la reducción progresiva del déficit fiscal y ajustes periódicos en el tipo de cambio. Coherente con una visión estructuralista, desde el Consejo Nacional de Desarrollo se intentó establecer los lineamientos para la planificación del desarrollo económico. Las disputas entre Tami y Salimei reflejaron las presiones a las que el ministro estaba sometido y el rumbo incierto que imprimían a su gestión. Tras el consenso sobre los objetivos revolucionarios subyacían desacuerdos sobre la orientación de la política económica. Los defensores de una estrategia desarrollista identificada con el nacionalismo económico y partidarios de un enfoque gradualista de la inflación, y los liberales, decididos a eliminar la inflación en forma drás-

31. Roth, Roberto, ob. cit., pág. 50.

32. Entrevista sostenida con el doctor Eduardo Zalduendo en setiembre de 1998. Véanse también las declaraciones de Zalduendo a la revista *Índito*, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1966, año I, n° 7, págs. 13-14.



Dr. Néstor Salimei, primer ministro de economía de Onganía.

tica y reducir la presencia del Estado en la economía, pugnaban por imponer su estrategia. La confusión crecía ya que las revistas representativas del nacionalismo de derecha en lo político se hacían eco de las posturas estructuralistas defendidas por el presidente del Banco Central. Pronto se puso de manifiesto que Salimei no lograba imprimir un rumbo a la economía y mantenerlo.

Se planteaba así una de las cuestiones críticas para afirmar la autoridad de Onganía, la referida a su relación con los grupos económicos poderosos. La otra cuestión, no menos decisiva, habría de ser la autonomía del presidente de la Nación respecto de las Fuerzas Armadas. Onganía no se cansaría de proclamar en cuanta ocasión se le presentaba que “las Fuerzas Armadas no gobiernan ni cogobiernan”; sin embargo, en la medida en que fueron creciendo las inquietudes de la jerarquía militar sobre la marcha de la Revolución, la

sorda lucha interna fue viendo la luz. Más una aspiración de Onganía que fruto de una voluntad prescindente por parte de los altos mandos militares, inicialmente en un compás de espera, el crédito otorgado pronto fue retaceado.

La sanción de una ley que obligaba a los trabajadores y a la patronal a someterse al arbitraje obligatorio del Poder Ejecutivo Nacional en todo conflicto laboral en el que no hubiese acuerdo entre las partes, fue vista como promisorio por el empresariado. Empero, otras acciones desalentaban las expectativas del sector. El esfuerzo del gobierno por promover la firma de nuevos convenios salariales en condiciones satisfactorias para los obreros de las industrias metalúrgicas y textiles, que habría de culminar con la homologación de los convenios de la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación Obrera Textil, corroboró la ambigüedad de la gestión. Los empresarios pretendían que se fijaran topes salariales, o bien que se congelaran los salarios incluso al precio de la intervención o la disolución de los sindicatos en los casos que fueran necesarios. Las medidas fueron consideradas como un reflejo de la debilidad presidencial frente al sindicalismo y alimentaron sospechas sobre cuál habría de ser el papel que Onganía esperaba otorgar a las organizaciones obreras en el nuevo régimen. En todo general poderoso, no dejaba de rondar el fantasma de Perón, qué pasaría si surgiera un nuevo Perón era la pregunta que desvelaba a empresarios y jefes militares. El subsecretario de Trabajo, José Tamboranea, contribuía a alimentar ese malestar con su intervención directa en las pujas sindicales.

Sin embargo, el mundo sindical no estuvo en el centro de la escena durante esta primera etapa. Los ingenios azucareros de Tucumán, provincia cuyo panorama económico y político era considerado emblemático de lo que había que erradicar en el país, la administración pública y las universidades nacionales fueron los principales objetivos del gobierno. En los tres casos se buscó afirmar la autoridad presidencial a rajatablas, pero lo que se logró fue erosionar el prestigio inicial del presidente.

En un contexto signado por la baja productividad del principal producto de la economía tucumana, el azúcar, y de reducción de los subsidios con que el Estado nacional había protegido a la industria azucarera, la crisis de sobreproducción de 1965 había desatado los conflictos sociales latentes. El paisaje social de Tucumán contrasta-

ba por la intensidad de los enfrentamientos con el resto del país. En 1965, el gobierno de Illia había optado por no subvencionar una producción que superase en un 50 por ciento el promedio del quinquenio 1960-1964. Los conflictos entre industriales y agricultores cañeros, cañeros y trabajadores del surco, industriales y obreros; y de todos contra el Estado nacional, se multiplicaron a partir de entonces. A la suspensión de pago de los jornales y de la caña entregada a los ingenios, se sumó la crisis de la administración provincial. Los pagos de los salarios a los empleados públicos se atrasaron y se sucedieron los paros, las tomas de ingenios, las manifestaciones en las calles y el corte de las rutas.

Al poco tiempo de entrar en funciones, el Dr. Salimei limitó la producción de caña de azúcar en un 70 por ciento respecto de 1965, intervino ingenios y descargó el peso del ajuste en los pequeños productores minifundistas y en los obreros de los ingenios más ineficientes. La resistencia social cesó. Los sindicalistas de la FOTIA, el gremio de los trabajadores azucareros más radicalizado antes del golpe militar, colaboraron con el gobierno en la solución del problema de los trabajadores cesantes. Habían dado una prueba de confianza a Onganía al declarar que "no se oponían a cambios fundamentales siempre que se hicieran gradualmente".³³ Mientras el gobierno se ufana del éxito del "Operativo Tucumán", la corrupción que acompañó al proceso de cierre y venta de ingenios en la que el propio Salimei quedó involucrado, erosionó la credibilidad del ministro. La Ley 17.163 que fijaba los cupos de la producción azucarera no se respetaba bajo el pretexto de proteger las fuentes de trabajo. La fabricación y comercialización "en negro" del azúcar favoreció a empresas económicamente no viables e hizo posible el enriquecimiento de sociedades de comercialización colaterales.³⁴ Mal podía afirmarse Onganía como el hombre de autoridad que la campaña psicológica había perfilado, si no era capaz de asegurar el cumplimiento de las leyes ni desterrar el patrón perverso de aprovechamiento del Estado para fines particulares. El mundo de los negocios se colaba en el gobierno y esta primera muestra ponía de manifiesto

33. *La Gaceta*, 2 de agosto de 1966.

34. Murmis, Miguel; Sigal, Silvia y Waisman, Carlos: "Tucumán arde", *Cuadernos de Marcha*, Montevideo, n° 27, julio de 1969, págs. 43-49.

to que la decisión de suspender el sistema político para poner al Estado al abrigo de las presiones sectoriales, era ilusoria. La denominada ley de "rehabilitación de empresas", conocida también como la ley "Siam Di Tella", ejemplifica el sesgo de las políticas. Esta empresa se había sobreexpandido y contraído una deuda sideral. Salimei proyectó la ley que consolidaba la deuda de ésta y de otras docientas de capital nacional, y Onganía la sancionó. El conflicto surgió a propósito de la reglamentación de la ley. El problema consistía en determinar criterios objetivos y parejos para todas las empresas que se encontraran en esa situación y un sistema automático de acogimiento que acordase a todas las mismas facilidades, con los mismos plazos. Sin embargo, Salimei optó por un sistema donde el caso de cada empresa iba a ser considerado por separado, con criterios flexibles, lo que dejaba un amplio margen para la discrecionalidad. El conflicto no pudo resolverse bajo la gestión de Salimei, pero se impuso su criterio bajo la gestión de su sucesor, Krieger Vasena. De este modo, el Estado aportaba al sostenimiento selectivo de la empresa privada. La denominada con ironía ley ALPI – remedando la sigla de la asociación de ayuda para las personas incapacitadas – con el argumento de la preservación de las fuentes de trabajo, favoreció selectivamente a los empresarios.



Krieger Vasena, ministro de Economía que ya había formado parte del gabinete de Aramburu.

A un mes de la instalación del gobierno, las universidades nacionales fueron intervenidas. El 29 de julio se suprimió la autonomía de las universidades públicas y éstas pasaron a depender del Ministerio del Interior, área que junto a Educación, Justicia y Comunicaciones, había quedado a cargo del doctor Enrique Martínez Paz. El gobierno adujo que había que poner fin a la infiltración marxista y a la agitación estudiantil. En 1946, un mes después de la victoria electoral de Perón, la misma medida había recaído sobre las universidades argentinas. Como entonces, un número considerable de profesores renunciaron para evitar ser víctimas de la purga que se descargaría nuevamente sobre las universidades. Muchos de ellos optaron por el exilio y la fuga de cerebros encaminó a los científicos "indeseables" hacia los centros de estudios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

El activismo estudiantil protagonizado por alas juveniles del Partido Comunista y sus diversas escisiones y por agrupaciones de izquierda de variados orígenes, que comprendían facciones desprendidas del viejo Partido Socialista, el trotskismo y el socialismo nacional, era un elemento particularmente irritante para el nuevo orden que Onganía quería implantar. Sin embargo, a pesar de las de-



"La noche de los bastones largos". Desalojo de la Universidad de Buenos Aires. Fue el comienzo de la diáspora académica argentina

nominationes de las agrupaciones estudiantiles, sólo reclutaban universitarios y profesionales. La resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires condenando el golpe fue el detonante que apresuró la reacción. La universidad, centro de modernización científica y cultural durante los primeros años posperonistas, era jurisdicción de los intelectuales y ámbito en el que tomaron la palabra en nombre propio. Hasta entonces no habían tenido proyección política fuera de ese ámbito académico, como lo muestra Silvia Sigal.³⁵ El gobierno radical había respetado la autonomía universitaria impuesta desde 1955 y tolerado manifestaciones estudiantiles y tomas de facultades. Esta concepción, ajena a la tradición del peronismo, no se compadecía con la voluntad de ordenar un país indisciplinado que inspiraba a Onganía. La violencia desplegada contra los universitarios habría de radicalizar los comportamientos de la generación de jóvenes y favorecer la sustitución de una concepción de la autonomía, hasta entonces entendida como compromiso personal y libertad cultural, por otra, para la cual todo es política y se borran los límites entre la universidad y la sociedad. La intervención y abolición del estatuto reformista culminaron en la primera represión policial masiva del gobierno: "La Noche de los Bastones Largos". Los golpes propinados a los ocupantes de la Facultad de Ciencias Exactas tenían un propósito ejemplificador y cumplieron su objetivo de aislar la resistencia estudiantil. En agosto, el Ministerio del Interior disolvió las asociaciones estudiantiles. Un mes después, la represión de una manifestación estudiantil en Córdoba cobró la primera víctima. Santiago Pampillón, estudiante universitario, fue abatido por la policía en una manifestación callejera. La opinión pública, que había recibido con indiferencia las medidas aplicadas en la universidad, fue conmovida por la ferocidad de la violencia represiva. Por primera vez se mataba a un estudiante y este hecho sería el preludio de la efervescencia que más tarde sacudiría la vida universitaria del país ante la mirada incrédula del secretario de Educación y Cultura, Mariano Astigueta, un nacionalista con inclinación hacia el cambio radical, decidido a introducir la religión en la enseñanza y convencido de que el nuevo estatuto universitario aseguraría el orden en las casas de altos

35. Sigal, Silvia: *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Punto Sur, 1991, pág. 248.

estudios. A él se atribuye la afirmación de que "Argentina es el único país del mundo que no tiene problemas estudiantiles".³⁶

El desempeño del nuevo inspector, comisario Luis Margaride, guardián moral de la ciudad de Buenos Aires, no dejó dudas acerca de las fobias en materia de sexo que dominaban al gobierno. Se persiguió a las parejas en las plazas, se multiplicaron las razias a los hoteles alojamiento, se clausuraron locales nocturnos y se prohibió el uso de minifaldas y pantalones a las mujeres en las escuelas y oficinas públicas. Con la clausura de la revista de humor *Tía Vicenta*, por entonces suplemento semanal del diario *El Mundo*, se inició un ciclo de cierre de periódicos y revistas. *Tía Vicenta* había dibujado en su tapa una morsa con el epígrafe: "La era de la morsa ha comenzado", una sutil analogía con los bigotes que usaba el presidente realizada por el humorista Landrú, sobre el cual no pocos fantasearon que escondían un labio leporino. Extraña imagen la de este presidente que ocultaba deformaciones a la mirada de la gente.

Onganía no dictó una ley que regulara la prensa, se limitó a afirmar en cuanta ocasión le pareció oportuna, que la prensa debía ser responsable. La autocensura fue la respuesta de quienes se acomodaron al nuevo diseño del poder. Por otra parte, la reglamentación del *habeas corpus* y del recurso de amparo, orientada a restringir drásticamente las libertades públicas, proveyó el instrumento legal con el que acallar toda disidencia. La Ley de Defensa Nacional, dictada pocos meses después, completó el panorama de un Estado dispuesto a reprimir cuando lo considerara necesario.

Los servicios públicos se convirtieron en otro de los blancos elegidos por el gobierno. El puerto de Buenos Aires, adujo el gobierno, debía ser puesto en condiciones competitivas con el resto del mundo. En octubre se estableció un régimen de trabajo que abolió las prerrogativas de las que disfrutaba el sindicato. La huelga portuaria fue sofocada con la presencia militar y el SUPA (Sindicato Único de Portuarios Argentinos), intervenido. En diciembre, le llegó el turno a los ferrocarriles. El gobierno diseñó un plan para reestructurarlos; basado en el diagnóstico de que el exceso de personal era el factor responsable de la baja rentabilidad. La Unión Ferroviaria y La Frá-

36. Potash, Robert: *El Ejército y la política en Argentina: 1962-1973*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pág. 77.

ternidad aparecieron con su propio plan, orientado a preservar los puestos de trabajo. La respuesta fue similar a la dada a los portuarios. Onganía decidió la intervención militar del gremio dispuesto a encarar la racionalización de los ferrocarriles con mano firme. El conflicto en los ferrocarriles dio impulso a un plan de lucha, lanzado el 1° de diciembre por la CGT, que debía culminar en un paro nacional. Con esta medida, Augusto Vandor, figura dominante en el movimiento sindical desde los años de Frondizi, esperaba beneficiarse como jefe indiscutido del movimiento laboral e interlocutor privilegiado del gobierno.³⁷

El reordenamiento de la administración pública fue motivo de continuo desvelo para el presidente. Sin embargo, los esfuerzos se redujeron a forzar a cada repartición a que diseñara su organigrama. La proliferación de oficinas de Organización y Métodos, tanto en la administración central como en las empresas públicas, no produjo cambios significativos en los comportamientos. A ello contribuyó la concepción burocrática que de su rol tenían las Fuerzas Armadas, encargada en el coronel Vidueiro, encargado de impulsar la racionalización. No se llevaron a cabo los temidos despidos masivos de empleados. Sólo el aumento de la presión impositiva y de las tarifas de los servicios públicos inauguró una tendencia que habría de permitir un mayor margen de maniobra estatal en la economía a partir de 1967.

La ley de Ministerios, preparada por Enrique Martínez Paz y su equipo, redistribuyó las materias atribuidas a los ministros y secretarios de Estado y creó un quinto ministerio, Bienestar Social, cuya función sería encarar "la acción comunitaria, la seguridad social, la protección de la salud y las mayores facilidades en materia de vivienda". Roberto Petracca, un industrial exitoso, fue designado en el nuevo ministerio. Muy pronto, el "quinto hombre" se enfrentó con las políticas de Salimei. Sin origen partidario común que cimentara lealtades, cada ministro reclamaba para sí la definición de lo que consideraba la mejor política. La proclamada intención del presidente de salvaguardar sus políticas de las exigencias de los grupos

37. A pesar del revés político sufrido en las elecciones de Mendoza, en 1965, la corriente vandorista había retenido el poder suficiente para desplazar a los sectores fieles a Perón. Estos últimos formaron una corriente dentro de las 62 Organizaciones peronistas, encabezada por el ex secretario de la CGT, José Alonso.

económicos, hacía aguas en el seno mismo del gabinete que, en ocasiones, se comportaba como una federación de ministerios. La prensa recogía la impresión generalizada de la falta de un equipo coherente de colaboradores en el nivel administrativo.³⁸ Mientras los intereses se colaban en un gobierno carente de políticas de mediación que pudieran atenuar sus consecuencias, el presidente parecía convencido de que el interés público estaba asegurado por funcionarios identificados con distintos intereses y orientaciones políticas. Convertida en filosofía de gobierno, la política "apolítica" de Onganía, prescindió de la mayoría de las organizaciones existentes y por ese camino dejó en libertad a los sectores más poderosos para actuar.

Onganía creía que la solución al problema de la decisión pública estaba en el planeamiento, observa Roth.³⁹ Con esa convicción se puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, responsable de fijar las políticas y estrategias. Integraban este sistema el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), organismo al que se asignó la elaboración de los planes de desarrollo acorde con los objetivos políticos fijados por el gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), creado por la ley de Defensa Nacional para mantener "la seguridad necesaria" y el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT). Las políticas y estrategias elaboradas en coordinación por los tres organismos, una vez aprobadas por el presidente y su gabinete, habrían de tener carácter imperativo para el sector público e indicativo para el sector privado.

No obstante la abundante producción, cinco volúmenes integran el Plan Nacional de Desarrollo elaborado en el CONADE entre 1966 y 1970 —el cuarto, dedicado a la industria, quedó inconcluso—. El planeamiento se compaginaba mal con la orientación predominante en el gobierno. La coexistencia de profesionales que hacían su tarea en el CONADE, y no estaban sometidos a presiones, con una administración que resultó ser indiferente a sus resultados, dejaba la impresión de que este sistema era un mecanismo ideado para mantener la ambigüedad sobre el rumbo a adoptar, rasgo que caracterizaba al presidente.⁴⁰

38. Véase el editorial de *Análisis*, n° 290, 3 de octubre de 1966, pág. 7.

39. Roth, R., ob. cit. pág. 381.

40. El doctor Zalduendo enfatizó en la entrevista concedida en septiembre de 1998 el hecho de que no estaban sometidos a presiones. Zalduendo llegó a desempeñarse como secretario del CONADE.

La sucesión de medidas adoptadas pareció agotar el repertorio del gobierno. Transcurrido un semestre, el esperado plan de acción se había reducido a la declaración de objetivos sin que se pudiera deducir cuál era el programa económico y en qué consistían las innovaciones con las que se pretendía cambiar al país. El ejercicio de una autoridad sin restricciones, pero sin rumbo definido, era el saldo del balance. El malestar castrense, el descrédito entre las grandes empresas nacionales y extranjeras y la creciente disconformidad de la opinión pública, colocaron a la defensiva a la Revolución Argentina. Las crónicas de los corresponsables del *New York Times* y del *Washington Post*, todas ellas atribuyendo antecedentes o inclinaciones antisemitas a los altos funcionarios del gobierno, deterioraron la imagen en el exterior.

Onganía había perdido el crédito inicial y soportaba la presión de los mandos militares. Salimei no había logrado poner fin a las políticas inflacionarias, nacionalistas y expansivas del pasado inmediato. "El primer equipo del presidente Onganía poco ha innovado en materia económica respecto de las líneas adoptadas por la administración radical", consigna *Análisis* en su editorial del 3 de octubre de 1966. El año 1966 terminó con una tasa de inflación del 30 por ciento anual que no pudo ser doblegada, un crecimiento nulo del producto, descendió en el nivel de inversión y una ajustada balanza de pagos. La tregua con que la CGT había recibido a Onganía se había roto con el anuncio de medidas de fuerza, el mismo mes en que el general Julio Alsogaray fue designado comandante en jefe del Ejército, en reemplazo del general Pistarini, uno de los artífices de la llegada de Onganía al poder. El sector nacionalista católico, y los socialcristianos que integraban su gobierno, perdían posiciones. Había llegado el momento de definir el rumbo.

Onganía se vio obligado a cambiar su gabinete. Adalbert Krieger Vasena fue nombrado en el Ministerio de Economía y Guillermo Borda en el Ministerio del Interior —las dos carteras más cuestionadas—. El Dr. Borda, un jurista con actuación en el peronismo, representaba una continuidad con su antecesor ya que compartía la pretensión de sustituir el pluralismo político por la participación de la comunidad organizada en un Estado fuerte, pero Krieger Vasena estaba lejos de ser el candidato de Onganía. Ministro durante la presidencia de Aramburu, asesor y miembro del directorio de grandes

empresas nacionales y extranjeras, hombre de fluidos contactos con los organismos financieros internacionales, Krieger Vasena era reputado como prestigioso economista de orientación liberal y pragmática. La designación de Borda irritó a los sectores liberales de la derecha. No estaban dispuestos a restaurar el proceso electoral y habían avalado con satisfacción el reemplazo de la política por la administración, pero desconfiaban de las intenciones corporativistas de Onganía. El presidente se apresuró a anunciar las tres etapas que tendría la Revolución Argentina. El tiempo económico, ahora a cargo de Krieger Vasena y su equipo de economistas liberales, quienes llevarían a cabo la tarea de lograr la estabilidad y la modernización del país; el tiempo social destinado a distribuir las riquezas alcanzadas durante la etapa inicial y, finalmente, el tiempo político, en el que se llevaría a cabo la transferencia del poder a organizaciones verdaderamente representativas de la sociedad. Con este planteo, inspirado en las *Bases de Alberdi*, Onganía dejaba en claro cuál era el papel que asignaba al nuevo ministro de Economía. Krieger Vasena sería el responsable de la creación de las condiciones necesarias para iniciar el tiempo social. Crítico de los partidos, lo era también del capitalismo al que consideraba causa del egoísmo social y principal obstáculo para el logro de la integración espiritual de la Nación. Católico militante, las tesis de la encíclica *Populorum Progressio* eran un marco de referencia obligado para su gestión. No podía imaginar las consecuencias que las transformaciones impulsadas en la economía por su nuevo ministro habrían de tener sobre el comportamiento del sindicalismo, al que esperaba situar en el lugar de uno de los pilares de la Revolución. La última carta de Perón que circulaba entonces auguraba una realidad muy distinta a la imaginada por Onganía: "La administración de Onganía es una simple continuación de la acción que ha venido azotando al país en los últimos 11 años. Lo que inicialmente pudo ser una esperanza se ha transformado en una desilusión que ha ido aumentando con el deterioro del gobierno".

4. La "gran transformación"

La etapa que se inició con el nombramiento de Krieger Vasena, en diciembre de 1966, inauguró un período que habría de extenderse hasta mayo de 1969, caracterizado por la ausencia de una oposición civil bien organizada y unificada. La convicción de que el continuo progreso económico facilitaría la llegada del "tiempo social" y con éste, el apoyo obrero a la Revolución que habría de culminar en la creación de un consejo económico social a escala nacional, alimentó un clima de relativa calma. Sin embargo, ese clima obedeció más a la dureza con que el nuevo ministro reprimió la resistencia sindical, que a la confianza otorgada por los jefes sindicales. En el verano de 1967, no se trataba de liquidar a un grupo de sindicatos portuarios como lo había hecho Salimei; eran los dirigentes de los gremios de trabajadores industriales bajo la conducción de Augusto Vandor, secretario general de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quienes se movilizaban en contra de la política del gobierno.

El plan de lucha lanzado por la CGT el 1° de diciembre recibió una respuesta del gobierno muy distinta a la esperada por los jefes sindicales. A diferencia de lo ocurrido cuando Illia debió enfrentar una situación semejante, el plan de lucha fue declarado "disturbio ilegal del orden público" y se castigó a los sindicatos que tomaron parte en él, aunque no se canceló la personería de la CGT. El 10 de marzo, la cúpula castigada de la CGT abandonó el plan de lucha a cambio de la promesa del secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, de que las supresiones de las personerías gremiales podrían ser revisadas y el diálogo reanudado. Esta primera experiencia de enfrentamiento con un gobierno que creían más sensible a sus demandas, había arrojado una amarga lección a los jefes sindicales: su acceso a los mecanismos de decisión dependía de decisiones políticas. Los gobiernos semiconstitucionales, habrían requerido de su apoyo o de su neutralidad, sometidos como lo estaban al dictamen de las urnas. El gobierno de Onganía, con el que compartían el resentimiento hacia la clase política, les había mostrado que el poder que creían tener era más vulnerable de lo que habían imaginado. Augusto Vandor pagó el precio del fracaso, acusado de falta de convicción por los sectores duros del sindicalismo. Sin embargo, el grupo de los "participacionistas" liderado por Vandor vio una nueva oportunidad

para consolidar su poder, alentado como lo estuvo por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y las vagas promesas del doctor Borda de un eventual papel asesor para los sindicatos en el marco de un consejo económico y social.

La suspensión de las negociaciones colectivas hasta fines de 1968 fue el golpe de gracia asestado por Krieger Vasena a la CGT, a pocos días de canceladas las medidas de lucha. Con esa medida se anulaban las bases sobre las que se asentaba la estrategia política del sindicalismo y se abrían las puertas para que el predominio alcanzado desde 1959 por los sectores más concentrados de la economía se proyectara en el orden político. El Estado se reservó la facultad de fijar los salarios cada dos años, como parte de su política de estabilización anunciada en el mes de marzo. Los sindicalistas recibieron la promesa de que el salario real se mantendría constante, mientras que las empresas tuvieron como incentivo para acordar los precios el acceso preferencial al crédito bancario y a los contratos con las empresas estatales. La política de ingresos representó una innovación respecto de los programas de corte liberal que la precedieron. Partía del supuesto de que en una economía cerrada como la argentina, los mercados de bienes y salarios no eran competitivos, un diagnóstico más realista que el de los anteriores programas de estabilización.

Krieger Vasena devaluó en un 40 por ciento el peso —la paridad pasó de 250 a 350 \$ por dólar— con el propósito de descartar toda especulación sobre futuras devaluaciones. La novedad de su política residía en que era el primer intento de compensar los efectos de la devaluación a través de la fijación de impuestos a las exportaciones tradicionales y la disminución de los gravámenes a la importación; medidas que impidieron una alteración profunda de los precios. Fue la primera devaluación que no provocó la transferencia de las ganancias al sector exportador, como era usual. El Estado, por su parte, a través de la retención a las exportaciones de los productos agrícolas obtuvo recursos para sanear las cuentas públicas. El déficit fiscal se redujo en un 50 por ciento durante su gestión.

Una política fiscal severa, basada en el aumento de la recaudación impositiva,⁴¹ la elevación de las tarifas de los servicios públicos, la

41. El grueso de la recaudación obedeció a la mejora en el cobro de los impuestos indirectos.

disminución de los empleados públicos y de las pérdidas de las empresas estatales, hizo posible que el Estado jugase un papel clave en la expansión de la inversión fija. La inversión pública creció en términos reales un 55 por ciento entre 1966 y 1970, y se empezaron o cobraron impulso obras entre las que se destacan la represa del Chocón, el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, el complejo Zárate-Brazo Largo, la central nuclear de Atucha y la pavimentación de la ruta 3.

Concebido como un ajuste global de la economía destinado a satisfacer los requisitos de los sectores más concentrados, el programa distribuyó los costos entre los demás sectores. Los productores rurales debieron ceder parte de sus ganancias extraordinarias derivadas de la devaluación del peso, la industria debió competir con bienes importados más baratos, los sindicatos se vieron privados de las negociaciones colectivas y las empresas estatales y la administración pública atravesaron un proceso de racionalización forzada.

Krieger Vasena renovó los contratos con las compañías petroleras extranjeras, eliminó los controles de cambio y firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Su política monetaria, a diferencia de lo que era habitual en los acuerdos con el FMI, se tradujo en un fuerte crecimiento de la oferta monetaria y del crédito bancario. Ganar la confianza de la comunidad económica era una meta decisiva para el triunfo del programa estabilizador. El ingreso de préstamos a largo plazo e inversiones directas del exterior se convertiría en el nuevo motor de la economía, que hasta entonces había sido el-gasto público. Sin embargo, la reactivación económica de 1967 y 1968 obedeció a la acción estatal, en especial a las inversiones en obras públicas. La cara más visible de las inversiones del exterior fue la compra de empresas argentinas, hecho que agudizó la crítica de los nacionalistas. Las reiteradas invitaciones al capital externo que el ministro hacía en sus declaraciones públicas no eran suficientes. Era necesario asegurar que el rumbo económico habría de mantenerse y que la paz social no habría de sufrir alteraciones, una tarea que desbordaba las posibilidades de Krieger Vasena. La política era su talón de Aquiles, como bien lo muestra O'Donnell.⁴²

42. O'Donnell, Guillermo: *El Estado burocrático autoritario, 1966-1973*, Buenos Aires, Ediciones Belgrano, 1982, cap. IV.

Hacia fines de 1968, la inflación había descendido desde un 30 por ciento anual a menos del 10 por ciento y los precios mayoristas habían subido un 4 por ciento contra un 21 por ciento en 1967; la balanza de pagos estaba equilibrada gracias a la entrada de capitales de corto plazo que fortaleció las reservas netas de divisas y compensó el desequilibrio generado por el deterioro en los términos de intercambio, y la economía había comenzado a expandirse en forma sostenida —el PBN creció el 5,3 por ciento contra el 3,6 por ciento del año anterior—. El déficit fiscal generado en gran medida por la reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas con la que se trató de compensar la caída de los precios mundiales ascendió sólo al 1,7 por ciento.⁴³

El gobierno podía poner en su activo el hecho de que el ingreso salarial, como porcentaje del ingreso nacional, seguía por encima del nivel de 1966. Sin embargo, el éxito económico durante los dos primeros años de la gestión de Krieger Vasena no se tradujo en popularidad para el régimen militar. Los sectores afectados por una política cuyos principales beneficiarios eran las fracciones más poderosas de la comunidad de negocios no tardaron en manifestar su descontento. Los productores rurales se quejaban por el impacto de las retenciones a la exportación pese a que habían obtenido generosas desgravaciones impositivas a las inversiones en el sector y logrado que se pusiera fin a la prórroga y congelamiento de los arrendamientos agrarios. Cuando el gobierno intentó imponer un impuesto a la renta potencial de la tierra para estimular la productividad y combatir la evasión fiscal, arreciaron las quejas ante una medida que consideraban "confiscatoria" y "colectivizante". Las pequeñas y medianas empresas, sin la protección arancelaria de la que habían gozado hasta entonces y sin acceso al crédito barato, acusaron al gobierno de querer concentrar y desnacionalizar la economía en nombre de la eficiencia y la competitividad. Las cooperativas de crédito que habían desempeñado un papel clave en el financiamiento de la pequeña y mediana industria y representado una seria competencia para los bancos y sociedades financieras, fueron el blanco de una política de requisitos y controles que logró reducir su volumen de

43. Pablo, Juan Carlos de: *Política anti-inflacionaria en la Argentina, 1967-1970*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1972, págs. 64-86.

1016, en 1966, a unas 350 hacia el fin de la gestión de Krieger. La Confederación General Económica (CGE), organización que nucleaba a los empresarios del sector, no vaciló en calificar de entreguista al gobierno. Los sindicatos, por su parte, optaron por una prudente pasividad, alimentada por la tentación de un sector menor, pero significativo, que prefirió tolerar las políticas del gobierno a cambio de pequeños favores. En 1967 los días hombres perdidos por huelgas fueron 242.953, una cifra que contrastaba con los 1.664.800 perdidos en 1966. Pese a la baja moderada de los salarios reales, el descontento crecía en sus filas. No pocos dirigentes a nivel nacional confiaron en recrear la antigua alianza nacionalista entre militares y sindicatos, convencidos de que la política liberal de Krieger Vasena y su equipo era extraña a los designios de Onganía.

Los logros económicos no alcanzaron para disipar la inquietud de la jerarquía militar, particularmente sensible a las ideas que el Dr. Borda lanzaba desde el Ministerio del Interior. ¿Acaso debían limitarse a obedecer los designios políticos de un ministro decidido a buscar canales alternativos a los del constitucionalismo liberal y democrático? La crisis política larvada que se había anunciado en la columna "Semana Política" de *La Nación*, el 12 de mayo de 1968, estalló en agosto de ese año, cuando Onganía destituyó a los comandantes de las tres armas. El general Julio Alsogaray había criticado abiertamente la gestión de Borda e impulsado a los altos mandos a analizar la gestión del gobierno, con lo que precipitó su relevo. Cuando dejó el cargo hizo pública su preocupación por la orientación del gobierno, "poco clara en lo político" y criticó la concepción autoritaria y paternalista de la autoridad que tenía el presidente. Se dice que advirtió a su sucesor que "tarde o temprano surgirán discordias".⁴⁴ Reafirmado en su posición de jefe de la Revolución tras disolver a la Junta Militar que lo había nombrado, el presidente se dispuso a llevar adelante su plan político de crear un sistema de participación comunitaria, complementario del sistema de planificación y toma de decisiones. Cancelado el sistema político, postergado *sine die* el proceso electoral, confinados los sectores afectados por la transformación económica a obedecer disciplinadamente la autoridad, el presidente parecía confiar en que "el tiempo social" le brin-

daría los apoyos necesarios para continuar en el poder. La paz que sucedió a la destitución de la Junta Militar era más aparente que real. Las críticas al esquema de participación sectorial provenientes tanto de defensores de la idea, pero renuentes a aceptar que se los confinara a un papel de asesoramiento, como de quienes denunciaban un diseño corporativista destinado a crear un partido oficial, ponían de manifiesto que el gobierno no lograba conformar a nadie. El primer consejo asesor económico-social puesto en marcha por el gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, no había dejado dudas acerca del carácter que tenía la anunciada participación de los sectores representativos de la comunidad. Reducido a producir dictámenes sin carácter obligatorio para el gobierno de la provincia e integrado por miembros designados por Caballero a propuesta de las entidades de los distintos sectores de la producción y la cultura, su función era puramente simbólica. La población enfrentaba problemas concretos como los impuestos inmobiliarios y provinciales. Se había desatado una serie de movilizaciones de los centros vecinales sin encontrar eco en el gobierno.

La política de designación de gobernadores, basada en la idea de distribuir el país según las zonas de influencia de las tres armas, ignoró las enseñanzas que podían obtenerse de la estrategia desplegada por el general Urquiza después de Caseros. Los gobernadores, tratados como interventores federales por el presidente, no eran hombres representativos del lugar. Considerados intrusos, fueron un elemento clave del malestar creciente en las provincias. La retórica regionalista del gobierno, cara al nacionalismo, era letra muerta. Ignorantes del potencial de protesta que yacía en los esporádicos conflictos que rápidamente languidecían, los funcionarios vivían haciendo planes de gobierno, prolongadas reuniones profusas en organigramas, encerrados en un ambiente de corte. Las reuniones periódicas con los gobernadores, mecanismo concebido por el denominado "operativo participación", no se traducían en políticas concretas de solución de los problemas de cada provincia. La descripción de la tercera conferencia de gobernadores realizada en Altavracia, un año después, es ilustrativa. El semanario económico financiero *Análisis*, con el título "El cuento de la participación", hizo un balance de la reunión. "El intendente de Altavracia, Antonio Abraham, quiso recibir con esplendor al presidente de la Nación: sobre el pór-

44. *Análisis*, n° 438, 5 al 11 de mayo de 1969, pág. 6.

tico de acceso a la ciudad hizo colocar un gigantesco cartel de género rústico ("Bienvenidos gobernadores") y, en las columnas del alumbrado, manojos de banderitas celestes y blancas. El lunes 5 Onganía llegó (...) pero ninguno de los 49.000 habitantes de la espléndida villa serrana se asomó al camino para verlo pasar..." El artículo recoge el editorial del diario cordobés *La Voz del Interior* que resume las impresiones dejadas por el conclave: "De alguna manera, la reunión es una imagen bastante aproximada de la actualidad del país: estructurada, ordenada y dirigida desde Buenos Aires, es otra oportunidad para que se manifieste con todas sus aristas la política cerradamente unitaria que se está ejerciendo en la República..." El epílogo de la jornada —concluye la nota de *Análisis*— deparó a los gobernadores y funcionarios el único entretenimiento posible: mirar por televisión la pelea de Locche con Hernández en el Luna Park". Entrevistado por la prensa, el secretario de gobierno, Mario Díaz Colodrero, negó que en esa reunión se instrumentara un sistema corporativista. "Lo que ahora se hace es institucionalizar mecanismos de asesoramiento, cosa muy distinta de la de poner en práctica mecanismos de tipo político."⁴⁵

La división del movimiento sindical entre una línea colaboracionista liderada por Vandor en las 62 Organizaciones y otra, que se negaba a convalidar al gobierno militar, pero también a movilizar a los trabajadores en su contra, las "62 De Pie", contribuyó al optimismo de Onganía, decidido a lograr una CGT apartidaria y despojada de líderes ambiciosos. Sin embargo, en el congreso celebrado por la CGT, en marzo de 1968, para elegir las autoridades de la organización —acéfala desde la renuncia de los responsables de la derrota de 1967— se fraccionó un movimiento de oposición conocido como la "CGT de los Argentinos", conducido por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro y sostenido por los líderes de las industrias en crisis. Hasta entonces, este sector rebelde había desafiado sin éxito al gobierno. La reacción más vasta habría de surgir en la serie de conflictos a nivel de las fábricas que estallaron en las zonas industriales del interior. En esos conflictos hizo su aparición una nueva generación de cuadros sindicales, impregnada de una ideología de izquierda que movilizó el descontento de los trabajadores. A la ca-

beza de las comisiones obreras, estos dirigentes combativos organizaron la resistencia. Fue precisamente en las industrias establecidas en el interior durante la década del 50, en las que se encontraban los obreros mejor pagos, donde floreció una conciencia reivindicativa que no se resignaba a aceptar las consecuencias que la suspensión de la negociación colectiva había acarreado. Esos trabajadores, en lugar de apoyar la política de estabilización de Krieger Vasena, se consideraban el sector más perjudicado por la imposición de controles a los salarios y, sobre todo, por la pérdida de su poder de negociación que trajo aparejada la suspensión de las negociaciones colectivas. Disponibles para movilizarse tras las propuestas que apuntaban al cambio global del sistema, se encolumnaron detrás de los nuevos liderazgos sindicales. Cuando la ola de descontento encontró su máxima expresión en Córdoba y Krieger Vasena tuvo que renunciar, se dice que comentó: "Me han volteado los obreros mejor remunerados del país...", los obreros del cinturón industrial cordobés. Esta era una constatación sorprendente para el ministro y para el propio presidente. Sin duda, el general Onganía se debe de haber sorprendido de la reacción de los trabajadores, no sólo porque provino, en este caso, de los obreros mejor pagos del país, sino porque la situación del sindicalismo había sido mucho mejor protegida que la de los partidos, disueltos y despojados de su patrimonio. Por otra parte, la Revolución les confería un papel central en la vida pública en un tiempo mucho menos remoto que el que deberían esperar los partidos políticos.

El año 1969 comenzó con signos económicos auspiciosos. La tasa de inflación anual rondaba el 7 por ciento, el nivel de actividad continuaba en ascenso y se estimaba que el PBN alcanzaría el 8,9 por ciento hacia el fin del año. Las reservas netas de divisas eran las más altas desde 1946. Onganía anunció el comienzo del tiempo social, convencido de que los logros económicos de su gobierno estaban destinados a perdurar y a salvaguardar la calma alcanzada hasta entonces. Lo que no cabía en los planes de Onganía era la presunción de que la paz social obedeciera a una tregua forzada por el gobierno, antes que a la voluntad de los diversos sectores sociales de resignarse a aceptar la consolidación de un orden muy distinto al que habían imaginado y al que comenzaron a percibir como un peligro real para lograr sus aspiraciones.

45. *Análisis*, n° 426, 13 al 19 de mayo de 1969, págs. 6-7.

II. LA REVOLUCIÓN A LA DERIVA

1. La protesta social

Las protestas de los estudiantes universitarios fueron la primera señal del estado de efervescencia social que habría de desatar el "nuevo mayo argentino", como lo denominara el obispo de Avellaneda, monseñor Jerónimo Podestá.¹ Ese clima no era ajeno a la difusión de las tesis católicas radicales por parte de una minoría de sacerdotes pertenecientes al Movimiento para el Tercer Mundo. La influencia conservadora que la jerarquía eclesiástica ejercía sobre millares de jóvenes argentinos estaba siendo socavada, y este hecho habría de tener una importancia decisiva en la aceptación de la lucha armada y el florecimiento de expresiones del nacionalismo iz-

1. Desde mediados de la década del '60 se comenzaron a perfilar dos posiciones en el seno de la Iglesia argentina como consecuencia del impacto de las nuevas ideas planteadas en las asambleas de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM): la preconiliar y la posconiliar, representada por Dom Helder Cámara, obispo brasileño. Podestá interpretó el sentido de estos cambios y previó con lucidez que separaban "un mundo que termina y otro que nace", abogando por un desarrollo democrático, de promoción de las masas populares. Véase Monseñor Jerónimo Podestá, "El vacío de poder se llena con el pueblo", *Cuadernos de Marcha*, Montevideo, n° 27, julio de 1969, págs. 9-12.

quierdista y popular.² Las declaraciones más radicales hechas en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, celebrada en Colombia en 1968, incitaron a una revolución teológica: otro debía ser el papel de la Iglesia y de los cristianos en el mundo; debían participar activamente en la gestión del cambio social hacia un régimen más justo. Los cristianos no podían ser indiferentes ante la injusticia y la violencia de los opresores. La Iglesia, desde esta perspectiva, asumía una función abierta de liderazgo social y político. La preocupación por los problemas sociales, el aliento a las reivindicaciones populares, la legitimación de la acción revolucionaria y la identificación del cristianismo con el peronismo, cuya figura emblemática fue el padre Mugica, configuraron una nueva moral cristiana que se convirtió en uno de los rasgos distintivos de la "nueva oposición política" surgida a finales de la década del sesenta. Monseñor Gerónimo Podestá, representante de las tesis moderadas sostenidas en Medellín, rechazó la confusión entre el liderazgo profético y el político, pero defendió el *aggiornamento* católico, condenando las estructuras sociales injustas y el régimen político opresivo.³ La pastoral de monseñor Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, titulada "No puedo aceptar una sociedad en la que los intereses de grupos dominen sobre el bien común" señalaba, tres días antes de que estallara el Cordobazo: "Pedimos a la comunidad cristiana (...) que con urgencia nos comprometamos a lograr un estado de justicia para todos, en especial para los más débiles y necesitados, abandonando los egoísmos personales y de grupos a través del ejercicio digno y responsable del diálogo en la comunidad".⁴ Después de Medellín, la Iglesia argentina exigía el cumplimiento de los ideales de la *Populorum Progressio* promulgada por el papa Pablo VI en 1967.

Ante la gravedad de los sucesos, el Episcopado emitió una declaración el 29 de mayo en la que incitaba al gobierno a "aceptar por las vías normales el contacto y el diálogo con los diversos sec-

2. Véase Gillespie, Richard: *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1982, págs. 79-80.

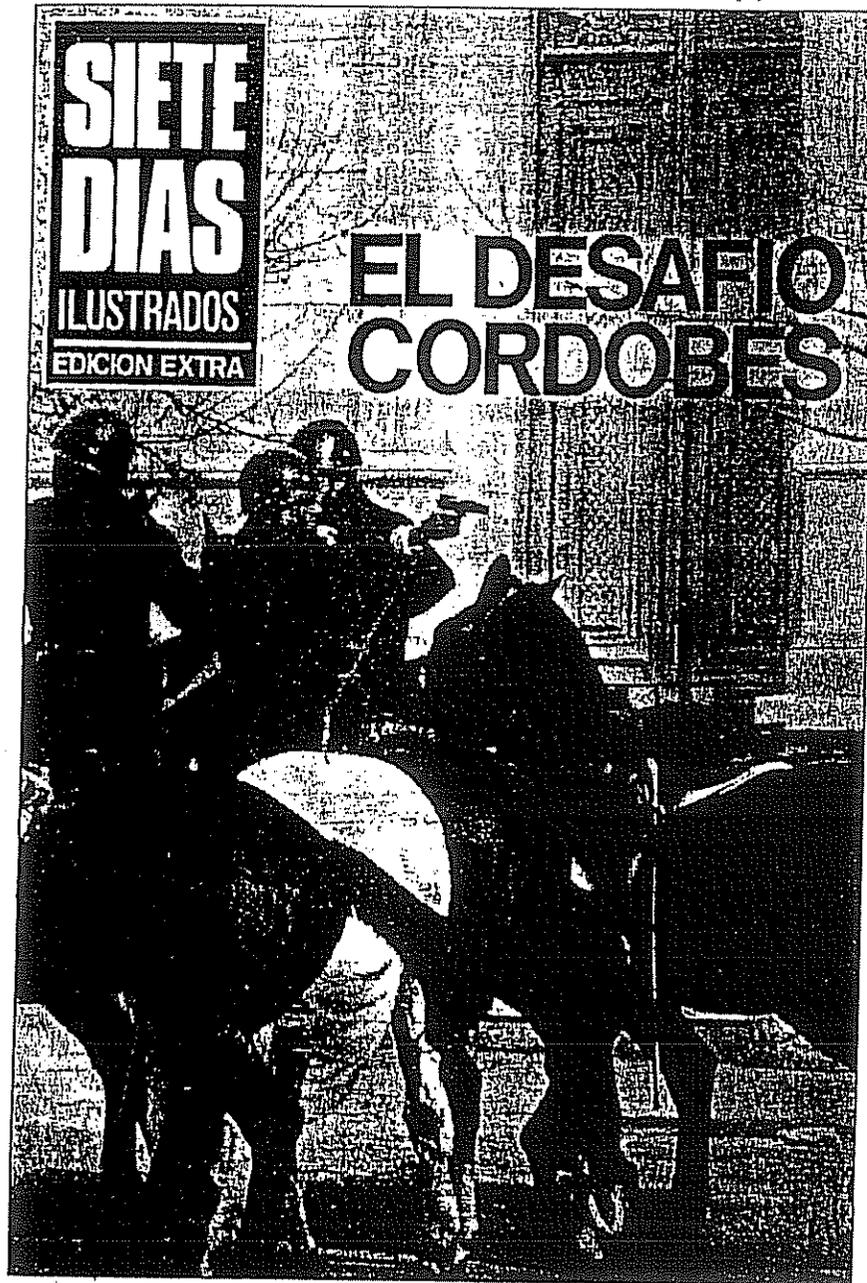
3. Monseñor Gerónimo Podestá, art. cit.

4. Texto completo reproducido en *Cuadernos de Marcha*, Montevideo, n° 27, julio de 1969, pág. 47.

tores que integran y contribuyen al progreso de la Nación".⁵ Sin duda, la preocupación mayor de la Iglesia era el fuerte viento de cambio que la sacudía, cuyas consecuencias se ponían de manifiesto en la creciente participación de los "curas rebeldes" en las luchas populares. La revista católica *Criterio*, en sus números 1565-1566 de febrero de 1969, anotaba que "la cruda realidad que vivimos es que el gobierno no sabe qué hacer con los universitarios" y "poco serviría exigir a los funcionarios que ha colocado, los proyectos e iniciativas que no pueden darle, porque la selección de tales funcionarios no se hizo por criterios de idoneidad (...) sino de amistad con los grupos o cenáculos consolidados dentro de una estricta ortodoxia ideológica". Pocas semanas después, los estudiantes de la ciudad de Corrientes salieron a las calles y uno de ellos fue muerto por la policía. El detonante de lo que algunos llamaron "la semana rabiosa" había sido el aumento de los precios del comedor universitario. Sin embargo, la transferencia de un servicio social a la explotación privada no es una explicación suficiente para comprender la agitación que se extendió al resto de las universidades, particularmente en Rosario, donde murieron dos estudiantes y la ciudad se convirtió en el escenario de una rebelión popular. La crítica a la gestión del gobierno en las universidades provenía tanto de círculos laicos como católicos. La revista *Criterio*, en su n° 1573, del 12 de junio, dedicó el editorial titulado "El fracaso de una política" a señalar que los episodios ocurridos en la Universidad del Nordeste no eran casuales: "esta institución ha debido soportar sucesivamente el gobierno de dos hombres, los rectores Devoto y Walker, carentes de idoneidad para el cargo, sin antecedentes universitarios, extraños al medio y de una mentalidad reaccionaria (...) Pero eran amigos políticos del secretario de Educación".

Un problema que vino a encrespar los ánimos en Córdoba, la segunda provincia en concentración industrial en el país, fue la derogación de la Ley 3546 de 1932, conocida como de "sábado inglés". La agitación estudiantil convergió con la movilización del SMATA (sindicato del sector automotor) contra esa medida. A partir de entonces, los hechos se precipitaron y el tema sindical se convirtió en

5. Cristiani, Arnaldo: "La Iglesia tercerista' en los sucesos de mayo y junio de 1969", *Cuadernos de Marcha*, Montevideo, n° 27, junio de 1969, págs. 19-24.



Tapa del semanario Siete Días, en una edición especial dedicada a los acontecimientos ocurridos en la capital de Córdoba.

tema político. Las dos centrales obreras se vieron obligadas a decretar un paro general para el día 30 de mayo, que en Córdoba se adelantó al día 29, fecha que coincidía con el día del Ejército. Los choques entre estudiantes y policías y la represión de las asambleas de trabajadores fueron el preámbulo de lo que se llamaría el "Cordobazo": los días 29 y 30 de mayo obreros y estudiantes ocuparon el centro de la ciudad desafiando a la autoridad del gobernador Caballero. Los trabajadores abandonaron las plantas industriales y desde los cuatro puntos de la ciudad comenzaron a marchar hacia el centro para participar en un acto previsto frente a la CGT. A las columnas obreras se sumaron estudiantes y gente del lugar. Desbordada por una multitud enardecida y por la acción de francotiradores, la policía se retiró. La ciudad quedó en manos de la gente y se produjeron numerosos actos de destrucción, en particular contra propiedades de firmas extranjeras, aunque no se produjeron actos de saqueo o pillaje. La rebelión cedió más tarde, con la ocupación de la ciudad por tropas del Ejército.

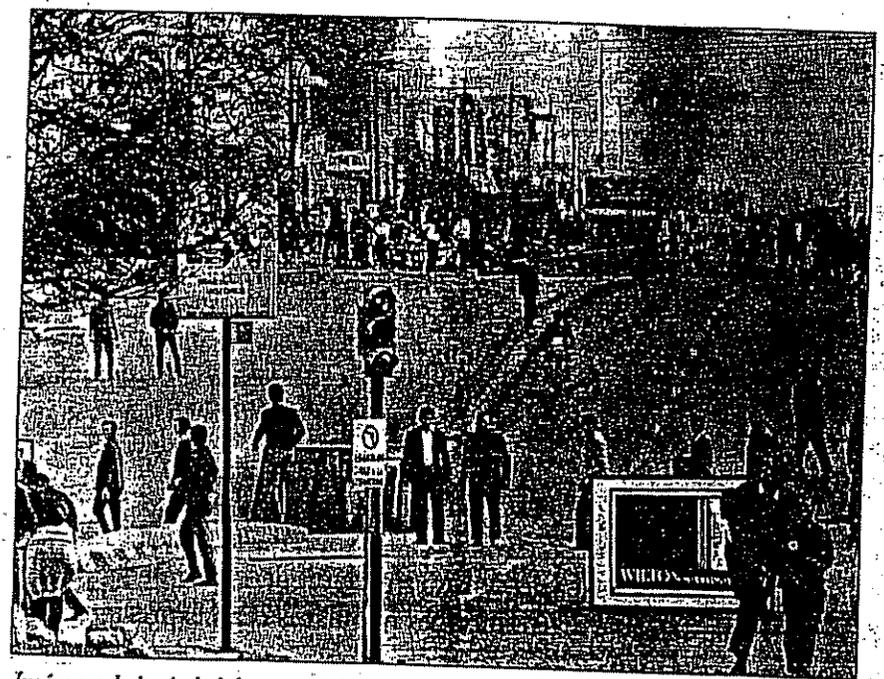
Era de conocimiento público que un movimiento importante estaba planeado para el día 29. El día anterior, en una reunión del CONASE se discutió la situación en Córdoba y en el curso de la misma surgieron diferencias entre los que veían el problema como un asunto de seguridad y los que creían que era necesaria una política que eliminara las causas de los desórdenes. El general Lanusse, quien había reemplazado en el cargo de comandante en jefe del Ejército al general Alsogaray, se habría opuesto al estado de sitio, argumentando que la situación no era tan grave como otros pensaban, y habría logrado imponer su opinión. Esa actitud, a la luz de los acontecimientos posteriores, sembró la desconfianza en el entorno de Onganía. No fueron pocos los que supusieron que detrás del comportamiento de Lanusse se escondía su ambición presidencial y así lo sostuvo el doctor Pérez Guilhou, quien no vaciló en calificarlo como traidor.⁶ La sospecha de intrigas en la cúpula del poder no abandonó al régimen militar a lo largo de toda su trayectoria.

El saldo de la rebelión cordobesa, un total de 14 muertos y más de 50 heridos graves de bala, y la destrucción de la propiedad, provocó alarma y asombro. Los motines populares eran expresiones de

6. Entrevista al doctor Pérez Guilhou, julio de 1998.

protesta con pocos antecedentes en la historia reciente. Desde el derrocamiento del peronismo, la lucha política no siempre se había librado dentro de los marcos legales; sin embargo, los líderes sindicales habían evitado ser desbordados por sus bases. Las movilizaciones de masa habían sido un instrumento de chantaje dentro de una estrategia de negociación. Al suprimir los canales legales y extralegales por los que había transitado la estrategia sindical, el gobierno militar pavimentó el camino para las rebeliones espontáneas que habrían de estallar en el interior del país.

El gobierno concluyó que se trataba de un complot subversivo planeado con cuidado, llevado adelante por guerrillas urbanas. Onganía, en lo que fue una confesión de su desazón, dijo: "Cuando en paz y en optimismo la república marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión, en la emboscada, preparaba su golpe". En realidad, los hechos demostraron que si hubo algo planificado fue el abandono de las tareas, la movilización hacia el centro de la ciudad y la confluencia final en un gran acto masivo frente a la CGT. Lo que sucedió después, se desarrolló espontáneamente y desbordó a los líderes sindicales que si algo preveían era la posibilidad de ser



Imágenes de la ciudad durante el Cordobazo.

arrestados, pero nunca ser juzgados por insurrección. ¿Qué hizo posible la adhesión masiva y la participación de la gente? Múltiples descontentos nacidos de la frustración política, la ausencia de libertad intelectual, el deterioro de la situación económica por la política centralista del gobierno y la gestión autoritaria del gobernador Caballero, conjugaron la acción de estudiantes universitarios, sectores sindicales peronistas decepcionados por la gestión de Onganía, partidarios del radicalismo desplazado del gobierno en 1966, que en la ciudad y en la provincia tenían una amplia base de apoyo popular y hasta conservadores descontentos con el correligionario que gobernaba su provincia como un autócrata.



Tapa del diario La Razón dedicada por completo al Cordobazo.

¿Cómo fue interpretado entonces, el Cordobazo? Reuniendo a obreros y estudiantes, el estallido social en Córdoba ofrecía la prueba de que se había abierto un camino, la señal de que algo diferente y nuevo era posible en el país. No previsto ni por el gobierno ni por la oposición, los misterios que encerraba le dieron la fuerza de un símbolo y la capacidad de servir a los más variados proyectos políticos. Para los sectores de la izquierda, era la esperanza de construcción de un nuevo orden que reconocía en el movimiento peronista el aglutinante capaz de soldar a la nueva izquierda surgida de las luchas sociales, al pasado con el futuro, y de llevar a la sociedad argentina hacia la "patria socialista".

Pocos días antes de los sucesos en Córdoba, *La Prensa* había publicado un artículo firmado por Federico Toranzo Montero en nombre de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora que refleja bien el amplio espectro del descontento. En el mismo, Toranzo Montero afirmaba: "Rosas y Perón cayeron abyectamente (...) sus émulos militares que demagógicamente contribuyen a la revitalización del proceso irreversible (...) no serán tolerados por el pueblo argentino (...) que no admitirá la presencia incondicional de dictadores por bien intencionados que fueren".⁷

Aunque errado en su diagnóstico, el gobierno alcanzó a valorar la profundidad del descontento popular puesto de manifiesto en los acontecimientos de mayo y a intuir la radicalización de las posiciones que podría traer aparejada. Cundieron las recriminaciones mutuas en la cúpula militar y se intensificaron las diferencias que habrían de alentar planes rivales para el futuro, pero prevaleció el espíritu de cuerpo y cerraron filas detrás de Onganía. El Cordobazo había sacudido la coraza del régimen militar y puesto en duda su capacidad para imponerse por la sola voluntad de la fuerza. Onganía, seguro de que la racionalidad y eficacia de sus políticas habrían de legitimarlo en el ejercicio del poder, confiaba en que esto era suficiente para conservar el crédito que sus camaradas de armas le habían otorgado. Se abocó entonces a la tarea de explicar en qué consistía su concepción de la participación de la comunidad en el marco del diseño de las políticas nacionales elaborado por el sistema de planeamiento, y simultáneamente proclamó la inminencia del

"tiempo social". Su discurso del 7 de julio no abrió un calendario político, como esperaban los partidos tradicionales. Fue una fría rendición de cuentas al ejército de la obra desarrollada en los tres años de gobierno. Los rumores sobre el probable derrocamiento de Onganía por sus camaradas de armas circulaban por todas las redacciones periodísticas.

En el nuevo clima surgido del Cordobazo, el general Aramburu, que se había mantenido al margen del gobierno, comenzó a propiciar una salida negociada a través de la rehabilitación de los partidos políticos, responsables de canalizar la protesta, con el objetivo de llevar al poder a un candidato presidencial que tuviera el visto bueno de las Fuerzas Armadas. Pero el tiempo político seguía pospuesto para un futuro remoto y sólo la intensidad de la violencia que se desató a partir de entonces habría de terminar por convencer de la conveniencia de esta solución a la corporación militar.

El Cordobazo tuvo un efecto de demostración, a pesar de las medidas represivas. A partir de entonces se sucedieron los alzamientos populares en las ciudades del interior, proliferaron las huelgas en abierto desafío a las direcciones sindicales nacionales y la protesta estudiantil penetró las universidades. Sin embargo, estos tumultos de amplia base popular fueron perdiendo intensidad y frecuencia y el centro de la escena fue ocupado por la guerrilla urbana.

La violencia se instaló con la convicción de que los trabajadores estaban preparados para llevar a cabo la lucha decisiva por el poder. Los grupos guerrilleros habían evolucionado desde el patrón clásico de bandas armadas compuestas por militantes clandestinos, común en América Latina y practicado en el país entre 1959 y 1964, hacia organizaciones de masas cuyos miembros mantenían diversos grados de participación en la lucha armada. La amplia participación de jóvenes de la clase media fue el rasgo distintivo de la experiencia argentina. Para estos jóvenes rebeldes que habían crecido en un clima de descreimiento en la legitimidad del proceso electoral —habían visto el veto militar a las elecciones de 1962, la proscripción del peronismo en 1963 y la toma del poder en 1966, por generales dispuestos a detentarlo *sine die*— el Cordobazo fue idealizado hasta convertirlo en una figura romántica. Ingresaron a la política a través de movimientos insurreccionales de variada inspiración ideológica, para los que la violencia, paradójicamente, se convertía en el camino

7. *La Prensa*, 23/5/1969.



Pedro Eugenio Aramburu, teniente general y ex presidente provisional de facto. Secuestrado por la organización Montoneros el 29 de mayo de 1970.

obligado hacia la pacificación. Como lo muestra Gillespie, la fuerza impulsora de los grupos que tomaron las armas entre 1966 y 1973, antes que un conjunto de ideales o una noción de utopía, era una cultura de rebelión arraigada en el contexto político y social de ese momento, en el marco de una historia de crisis políticas recurrentes. El ala combativa del peronismo fue en un principio muy heterogénea, particularmente antes de la fusión de otros grupos con los Montoneros, durante 1972 y 1973. Esos grupos eran de origen marxista y tenían una cosmovisión, mientras que los grupos nacionalistas buscaban una ideología, o bien tenían poco tiempo o interés para dedicarse a esa tarea. Dentro de la vertiente nacionalista, decidida a ligar la cuestión nacional con la redención popular, había grupos a los que el catolicismo les proporcionaba un puente con la Teología de la Liberación y por esa vía, una visión, aunque confusa, de una sociedad basada en la justicia social. A grandes trazos puede afirmarse que los fundadores de las "formaciones especiales", brazo armado de la juventud peronista, tenían muy claro a qué se oponían,

pero no lo que defendían. Su objetivo era anular toda manifestación política de colaboración, todo intento de solución política para la crisis militar en pos del retorno de Perón. Su utopía era una visión del pasado, no del futuro. La influencia de la Revolución Cubana como estrategia de conquista del poder se compaginaba con la valoración de proyectos tan disímiles como los de Castro en Cuba, Allende en Chile, Velasco Alvarado en Perú y Torrijos en Panamá. Ninguno de los grupos guerrilleros pudo traducir sus preferencias por el futuro de la Argentina en un programa político, ya sea por la percepción de que Perón era la solución, ya sea porque la lucha armada misma era concebida como el proceso revolucionario y la violencia una parte integral de la solución.⁸

La audacia de los grupos guerrilleros fue creciendo en relación directa con la tolerancia que encontró en la clase política y la benevolencia de una opinión pública que terminó por acostumbrarse a una acción política que si bien no era totalmente nueva, nunca se había empleado para dirimir los conflictos sociales en la historia reciente. El ex presidente Frondizi fue el primero en avalar públicamente la violencia popular. El diario *El Clarín*, el 3 de junio de 1969, publicó una declaración de Frondizi en la que afirmaba que "La violencia popular es la respuesta que procede de la violencia de arriba: salarios cada vez más insuficientes, enorme presión impositiva, desnacionalización de la economía, agresión a la universidad. Por eso no hay pacificación posible que no se funde en el cese de la violencia que engendra la actual política económico-social". A esta explicación economicista, se oponía la interpretación política del general Lanusse. El argumento de Lanusse, según el cual la violencia era provocada por la clausura de todos los canales de expresión de la voluntad popular, bien podía interpretarse como una invitación a considerar que mientras no se restablecieran plenamente las instituciones democráticas, no estaba totalmente injustificada. Ese razonamiento habría de ser una pieza clave en su empresa de buscar el consenso militar hacia una salida electoral.⁹ Sin embargo, el corolario obligado del razonamiento de Lanusse, de que una vez restaurada la democracia constitucional ya no habría condiciones para los violen-

8. Gillespie, Richard, ob. cit.

9. Lanusse, Alejandro A.: *Mi testimonio*, Buenos Aires, Laserra Editores, 1977.

tos, era una advertencia para aquellos que la habían practicado de que no tendrían un lugar en el nuevo orden en gestación. En la medida en que quedaban excluidos del proyecto político tanto los guerrilleros como su jefe político exiliado, la estrategia de Lanusse vino a reforzar el vínculo entre ambos y de ese modo, convirtió a Perón en el árbitro de la salida institucional. En su último libro, *Confesiones de un General*, Lanusse escribió: "Entonces no parecía tan alucinante como la podemos ver ahora esa mezcla de nacionalismo, de tradicionalismo semifeudal, de fascismo, de industrialismo, de llamamientos al deber de las Fuerzas Armadas, de apología de la violencia, de guerrillerismo y de complejas tesis antiguerrilleras, de teorías de la modernización y de nostalgia cultural. Muchas razones históricas y hasta psicológicas explican la melancólica mirada cariñosa que numerosos defensores de los valores clásicos dispensaron a la violencia. No sé por qué, además, siempre se desdeñó la afinidad que genera la circunstancia de compartir metodologías".¹⁰ De esta lectura retrospectiva del general Lanusse sobre el clima político y cultural que se instaló a mediados de los años sesenta en el país, es interesante subrayar el creciente desconcierto que la espiral de violencia provocó en el cuerpo de oficiales. Sólo así se explica la cada vez más tibia reacción que le prodigaron. Las sospechas de vinculaciones entre oficiales retirados y Montoneros, a la que contribuyó la oposición de Lanusse a sacar la investigación del secuestro y asesinato de Aramburu de las manos de la Policía Federal, muestra que existía una tácita aceptación de la violencia como instrumento político. Aún no se percibían los alcances de una acción que habría de ser el sustento de una estrategia de oposición a cualquier intento de conciliación.

La reacción inmediata de Onganía sirvió para calibrar el impacto que los acontecimientos habían tenido en el presidente, poco afecto, como se dijo, a tomar decisiones bajo la presión de las circunstancias. Onganía cambió su gabinete. Aprovechó para remover a Krieger Vasena y designar en su lugar a José María Dagnino Pastore, un técnico sin antecedentes políticos, y reemplazó a Borda, cuestionado por los sectores liberales, por su tendencia nacionalista

10. Lanusse, Alejandro A.: *Confesiones de un General*, Buenos Aires, Planeta, 1994, pág. 258.

Tato
SIEMPRE EN DOMINGO...

LIBRO: CESAR BRUTO

CON LA ACTUACION DE
ASTOR PIAZZOLLA Y SU CONJUNTO
RODOLFO CRESPI, RAUL RICUTTI, HELLY PRINCE Y VICENTE LARRUSA

DOMINGOS A LAS 21.00

...Y SIEMPRE EN TELEONCE





Propaganda de Tato (Bores), uno de los más importantes humoristas políticos.

y pro-peronista. Franciso Imaz, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y hombre de ideas afines a las suyas, ocupó la cartera de Interior. Dardo Pérez Guilhou reemplazó a Astigueta, dejó sin efecto los nombramientos previos e inició una gestión de orientación diametralmente opuesta a la de sus antecesores. El nuevo equipo de orientación social cristiana fue blanco de la crítica de liberales e izquierdistas, sea porque se avizoraba que tiraría por la borda los logros alcanzados por el "tiempo económico" en pos del "tiempo social", sea porque se lo acusaba de "entreguista" y responsable de un "desarrollismo excesivamente dependiente".

Onganía, en mensaje del 4 de junio, el primero que pronunció después del Cordobazo, anunció "la intención del gobierno de instrumentar los mecanismos adecuados para alcanzar la efectiva concurrencia de las fuerzas del trabajo en el proceso de transformación que se cumple. Las reivindicaciones sociales tienen que tener un cauce". Se apresuró a proclamar la necesidad de una organización sindical unida y auténticamente representativa -tarea en la que estuvo empeñado desde el comienzo de su gobierno- y a prometer la renovación de las convenciones colectivas de trabajo, en clara señal de su voluntad de buscar acuerdos con los líderes sindicales que garantizaran su cooperación con el gobierno.